

Nota secretarial: Corozal-Sucre, 25 de mayo de 2023. Señora juez, paso a su Despacho el presente proceso, informando que hay una solicitud por resolver. Sírvase proveer.


KARIME CORONADO MARTINEZ
SECRETARIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL
COROZAL – SUCRE**

Veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVOS SINGULAR DE MENOR CUANTÍA

DEMANDANTE: LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ CÁRDENAS

DEMANDADO: DAIMER JOSE CONTRERAS CASTILLO

RADICADO: 702154089001-2018-00124-00

ASUNTO: RESUELVE SOLICITUDES VARIAS

Revisado el presente proceso el despacho se percata que, la parte demandada solicita al mismo tiempo su terminación por desistimiento tácito, y propone como excepción de mérito de prescripción de la acción cambiaria, lo primero por haber permanecido inactivo desde el 25/09/2019, habiéndose librado mandamiento de pago de 18 de abril de 2018 y hasta la fecha no se ha concretado la notificación de este auto, porque únicamente se cumplido lo concerniente con la comunicación Artículo 291 numeral 3.

Ahora bien analizando el expediente digital cargado en plataforma TYBA, se encuentra que efectivamente el mismo se ha mantenido sin trámite alguno desde hace más de dos años por falta de impulso del demandante. La última actuación se cumplió el día 25/09/2019 y consistió en un auto proferido por el despacho donde se reconoció personería jurídica a un nuevo abogado, con ocasión a una solicitud interpuesta por la parte demandante. Es decir que, ha transcurrido más tiempo del previsto en el artículo 317 del código General del Proceso para que se decrete el desistimiento tácito en el evento del numeral 2º.

Dicha norma dice: “EL desistimiento tácito se aplicar en los siguientes eventos”...
“Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaria del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la notificación o desde la última diligencia o actuación a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costa o perjuicios a cargo de las partes...”

En consecuencia, además de referirse el despacho a la solitud de la apoderada de la parte demandada en la que plantea la excepción de mérito de prescripción de la acción cambiaria, porque hasta la fecha, la notificación del auto de mandamiento de pago no ha concluido, ya que solamente se remitió la comunicación para la notificación personal y no se gestionó lo concerniente a la remisión del aviso. Se resolverá lo relativo al desistimiento tácito, obviamente no hay necesidad de tramitar la otra solicitud.

No esta demás hacer la siguiente precisión que en cuanto a que tratándose de la aplicación del desistimiento tácito, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, STC5402-2017, reiteró: “(...) la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanción ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido artículo [317 del Código General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluación particularizada de cada situación,

Es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposición de la premisa legal. Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderación y sensatez a la hora de aplicar la ley, más cuando, como en el caso de autos, la aplicación automática de las normas puede conducir a una restricción excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia (...).”.

Vale la pena preguntarnos si esta circunstancia que tiene también su fundamento en el principio de equidad, y aplicabilidad sobre todo, cuando en un proceso se han agotado todas las fases, en el caso del ejecutivo por ejemplo, después de haberse dictado sentencia, o auto que ordena seguir adelante con la ejecución y existe liquidación del crédito, pero no se han materializado las medidas cautelares, tendría alguna importancia en cuanto al tipo gestión que debe solicitar el apoderado para que el juez no considere su omisión como negligente, frente a la ficticia o real insolvencia del deudor. O, si por el contrario el demandante no se encuentra obligado a solicitar o realizar cualquier actuación superflua o inútil, por ejemplo medidas cautelares sometidas a la eventualidad, al azar, liquidaciones adicionales

de crédito como lo indica el artículo 447 del CGP, sin que exista dinero que entregar, dentro del plazo establecido para que opere esta figura (dos años).

Cree este despacho, que atendiendo a que la CC que declaró exequible el artículo 317, en la sentencia C-1186 del 2008, sobran estas reflexiones, pues atendiendo el artículo 243 de la Constitución, “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio de control jurisdiccional hace tránsito a cosa juzgada constitucional...”

Se recuerda que nuestra máxima autoridad jurisdiccional estableció en esa sentencia:

“(...) que el desistimiento tácito (i) evita la paralización del aparato jurisdiccional en ciertos eventos; (ii) permite obtener la efectividad de los derechos de quienes activan o participan en la administración de justicia, pues la efectividad de los derechos depende de la prontitud de los medios que sirven para materializarlos; (iii) promueve la certeza jurídica de quienes actúan como partes en los procesos, entre otros efectos constitucionalmente valiosos, dirigidos a que se administre pronta y cumplida justicia, y a que las controversias no se prolonguen indefinidamente a lo largo del tiempo...”

Nuevamente la C.C. en la Sentencia C-173/19, reiteró su motivación para negar otra demanda contra el artículo 317.

DESISTIMIENTO TÁCITO-Modalidades/DESISTIMIENTO TÁCITO-Implicaciones

El desistimiento tácito, además de ser entendido como una sanción procesal que se configura ante el incumplimiento de las cargas procesales del demandante, opera como garante de: (i) el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, celer, eficaz y eficiente; (ii) la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia y (iii) el acceso material a la justicia, en favor de quienes confían al Estado la solución de sus conflictos. Todo esto en el entendido de que la racionalización del trabajo judicial y la descongestión del aparato jurisdiccional, finalidades a las que aporta la decisión de terminar anticipadamente un trámite judicial, contribuyen significativamente a hacer más expedito el trámite de los litigios judiciales.

DESISTIMIENTO TÁCITO-Extinción del derecho perseguido

El literal demandado contiene una medida que se ajusta a la Constitución dado que se acreditó su razonabilidad y la consecución de finalidades constitucionalmente legítimas (supra num. 5.1.1). Asimismo, se acreditó la idoneidad de los medios elegidos y que no se limitaron derechos fundamentales de forma excesiva (supra num. 5.1.2). La Sala concluye, entonces, que el cargo sustantivo de la demanda no está llamado a prosperar. En consecuencia, se declarará la exequibilidad del artículo 317, numeral 2º, literal “g” de la Ley 1564 de 2012.

DESISTIMIENTO-Definición

Es un acto procesal dirigido a eliminar los efectos de otro acto procesal ya realizado; por tanto, debe ser asumido como una declaración de voluntad al interior del proceso, bien de forma expresa (desistimiento expreso) o de forma tácita (desistimiento tácito).

DESISTIMIENTO TÁCITO-Concepto

Este es consecuencia de la falta de interés de quien demanda para continuar con el proceso, pues se estructura sobre la base de una presunción respecto de la negligencia, omisión, descuido o inactividad de la parte...”

Aterrizando nuevamente en el campo puramente procesal o legal, abandonando el aspecto constitucional, no está demás anotar que el doctor Miguel Enrique Rojas, a partir de la exégesis del literal b) numeral 2º del artículo 317 mencionado, dice que el ordinal “b) la segunda hipótesis de desistimiento tácito atiende a una concepción de juez más relajado, menos acucioso, dispuesto a aprovechar la desidia de las partes para relevarse de llevar el proceso a su destino natural. En esta modalidad lo que justifica la aplicación del desistimiento tácito es la simple inactividad de todos los sujetos procesales, incluso del juez, durante un año, salvo que en el proceso haya quedado en firme la sentencia o el auto que ordene seguir adelante la ejecución (art. 440, inc. 2º), caso en el cual el término es de dos años. Esta modalidad de desistimiento tácito se decreta de plano, es decir, sin requerimiento previo, lo que invita a tener especial cuidado para no hacer nugatoria la tutela judicial por el afán de expeler del despacho judicial los procesos que no exhiben movimiento”(pp. 367-368).

Y, finalmente, aunque en este asunto se menciona la decidía de las partes como el motivo para que se declare el desistimiento tácito, considera necesario esta operadora judicial, distinguir entre partes y su apoderados. Porque a su parecer se debe rechazar por injusta cualquier responsabilidad que se le impute al abogado, cuando el demandado durante el proceso se muestra insolvente de manera ficticia o real. A menos que exista un contrato de prestación de servicios, y en el mismo con fundamento en lo previsto por el artículo 2178, aplicable a esta clase de contrato, porque se trata de un mandato, por el tipo de gestión profesional que se encarga a los abogado, artículo 2142 y 2144 del Código Civil, que se rige también por esta normatividad, y que dice: “Insolvencia de los deudores y responsabilidad de los mandatarios. El mandatario puede por un pacto especial, tomar sobre su responsabilidad la solvencia de los deudores y todas las incertidumbres y embarazos del cobro. Constituyese entonces principal deudor para con el mandante, y son de su cuenta hasta los casos fortuitos y la fuerza mayor”

Además, es de recordar también, que el artículo 2184 del mismo código prevé entre las obligaciones de carácter general del mandante: 1. Proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato. Y que para este despacho en cuanto al proceso ejecutivo, y sobre este punto, no es otra que la obligación de suministrar la información mínima a su abogado para que pueda éste perseguir judicialmente los

bienes que pertenezcan al deudor, pues según lo expresado por el artículo 2488 del C.C., “Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los inembargables”. Y porque se supone que si realizó con el deudor un negocio jurídico, como un buen padre de familia, debió haber indagado por la situación económica de su contraparte. (Artículo 64 del Código Civil).

Es más, el artículo 2185 sobre el incumplimiento del mandate, indica que el mandante que no cumple por su parte aquello a que es obligado, autoriza al mandatario para desistir de su encargo.

En este caso, el tiempo que transcurrió (Cinco años), supera ampliamente el plazo límite de inactividad del proceso, siendo además suficiente para que el demandante ubicara e identificara nuevos bienes en vista de que las medidas cautelares inicialmente ordenadas resultaron ilusorias. O en este caso en concreto le informara al mandante la dirección actual del demandado y así poder efectuar oportunamente la notificación del mandamiento de pago para continuar con el trámite normal de un proceso ejecutivo.

Y, por último, de haber depósitos judiciales constituidos por concepto de medidas cautelares se le entregaran a la apoderada de la parte demandada, por no encontrarse debidamente notificado el auto que libró mandamiento de pago.

Así las cosas, se

RESUELVE

PRIMERO. Decretar la terminación anormal del proceso ejecutivo por haberse configurado el desistimiento tácito.

SEGUNDO: Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares practicadas sobre los bienes del demandado, teniendo en consideración de la existencia de otro embargo sobre los mismos bienes o de su remanente, se deberán poner a disposición del respectivo juez de ejecución.

TERCERO: Ordenar el desglose de los títulos base del recaudo con los documentos y anexos pertinentes para que se le entreguen al ejecutante, con la prevención de que podrá presentarse nuevamente la demanda ejecutiva transcurrido seis (6) meses contados desde la ejecutoria de este auto, sin perjuicio de los efectos señalados en el literal f), del numeral 2º. Del referido artículo 317 del C.G.P., en la respectiva anotación se dejara constancia de la causa de la terminación del proceso y la fecha de ejecutoria de este pronunciamiento para el cómputo del mencionado plazo.

CUARTO: Ordenar la entrega a la apoderada judicial del demandado doctora Anais Gómez Solórzano los depósitos judiciales que hayan sido constituido por concepto de medidas cautelares.

QUINTO: Sin lugar a condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MARITZA CURY OSORNO
JUEZA